

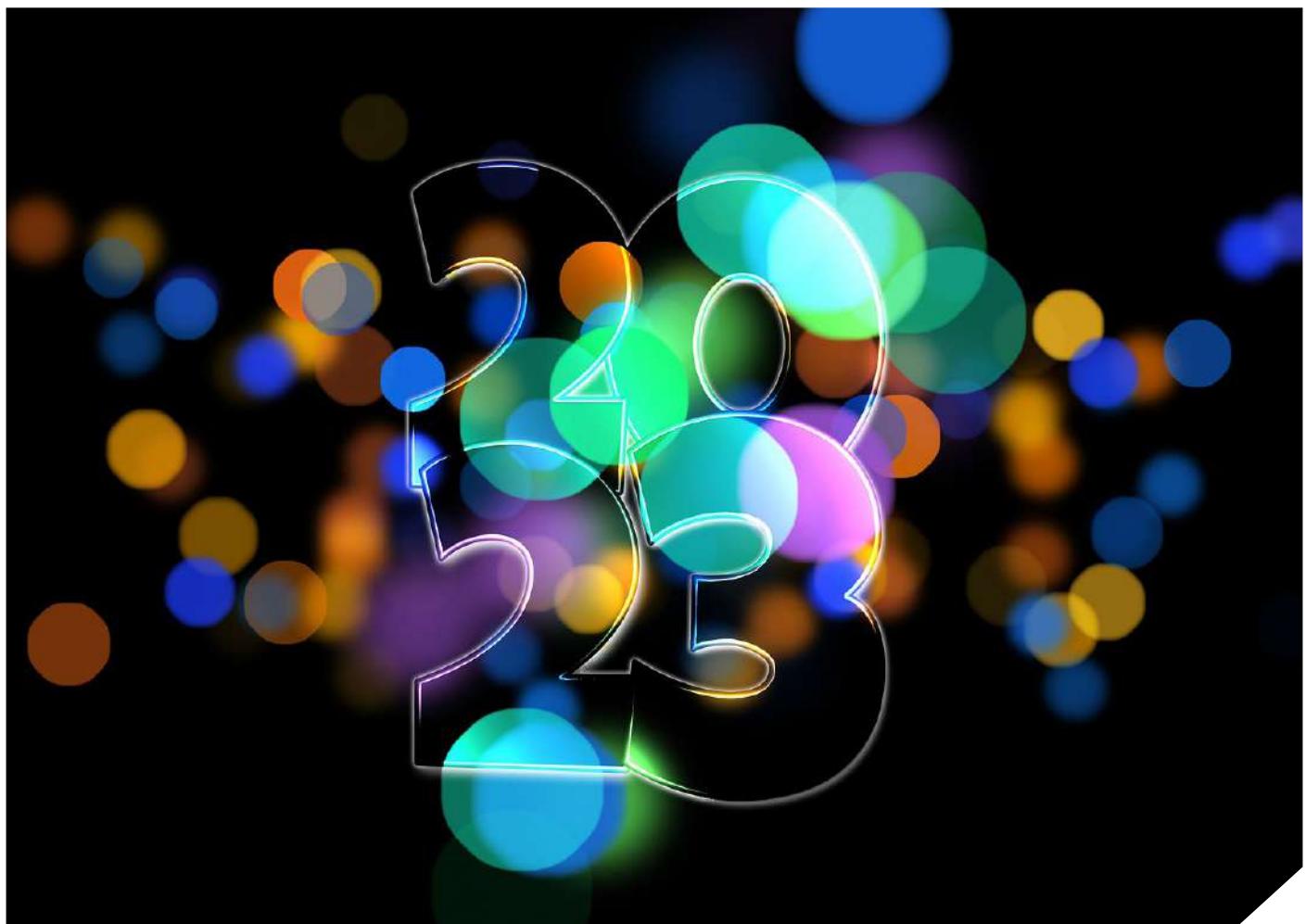
# COLUMNAS®

— REVISTA LEGAL —  
LEGAL MAGAZINE



MUÑIZ  
OLAYA  
MELENDEZ  
CASTRO  
ONO  
& HERRERA  
Abogados

NÚMERO 210



EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

**Entre lo privado y lo público: ¿El área legal de un banco y de una entidad estatal pueden tener el mismo enfoque?**

*Between private and public: Can the legal department of a bank and a state entity have the same approach?*

**Fiscalización ambiental en el sector transportes**

*Environmental Inspection in the Transport Sector*

**¿Es legítima la resolución unilateral de contrato sin expresión de causa?**

*Is unilateral termination of a contract without cause a legitimate tool?*

**Emergencia sanitaria y los aspectos laborales que se mantienen vigentes**

*Health emergency and the labor aspects still in force*



Entre lo privado y lo público: ¿El área legal de un banco y de una entidad estatal pueden tener el mismo enfoque?

JUAN CARLOS BUSTAMANTE  
Gerente legal  
Banco de la Nación

5



## COMENTARIO TRIBUTARIO

Reflexiones con relación al procedimiento de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa (SSCO) como mecanismo contra la evasión fiscal

CÉSAR CASTILLO DEL ÁGUILA  
Asociado, especialista en derecho tributario

8



Fiscalización ambiental en el sector transportes

CECILIA TORRE SANDOVAL  
Asociada senior, especialista en derecho ambiental

11



La Inteligencia Artificial como Herramienta Eficiente para los Programas de Compliance

MARCO RUIZ MARTÍNEZ  
Asociado, especialista en Compliance y derecho penal

14



## ALERTA MAXIMA

Ley no. 31591: Reforma de la apelación y la casación civil

17



## EL EXPERTO

Emergencia sanitaria y los aspectos laborales que se mantienen vigentes

CLAUDIA CHÁVEZ CHÁVEZ  
Socia, sede Arequipa

19



## DESDE EL CONGRESO

- \* Colegios privados deben informar con anticipación aumento de pensiones.
- \* Licencia en favor de hombres para prevención de cáncer.

23



## COMENTARIO LABORAL

Digitalización de documentos instrumentales con valor legal

RICARDO CATTER  
Asociado, especialista en derecho laboral

25



¿Es legítima la resolución unilateral de contrato sin expresión de causa?

CARLA SORIANO GARCÍA  
Socia, sede Ica

27



Actividades institucionales

30



**COLUMNAS**  
REVISTA LEGAL  
NÚMERO 210

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.  
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú  
Nº 2007-07703

Número anterior Nº 209

**ESTUDIO MUÑIZ**  
MUÑIZ OLAYA  
MELÉNDEZ  
CASTRO  
ONO & HERRERA  
Abogados

### Comité Editorial:

Fernando Meléndez  
Arturo Ferrari  
Silvia Núñez  
Alexandra Ojeda

### Comentarios y sugerencias:

aferrari@munizlaw.com  
snunez@munizlaw.com

**OPENSAC**  
IDEAS & SOLUCIONES

editor.open@gmail.com  
T-(51) 936 645 459

# Recuperar el tiempo perdido

"El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas."

Bertrand Russell

**A**caba de juramentar el segundo gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte, a tan solo 13 días de haber asumido el cargo, luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo declarada por el Congreso de la República, como consecuencia del fallido golpe de Estado que este intentó perpetrar en su mensaje a la nación propalado el último 7 de diciembre.

Preside este nuevo gabinete, designado en medio de una gran convulsión social que hasta este momento ha cobrado la vida de aproximadamente 25 personas, el abogado Alberto Otarola, ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Y lo integran, entre otros, algunos técnicos provenientes de las canteras de los sectores que ahora dirigen. Por las graves circunstancias que venimos atravesando, no genera mucha expectativa, pero como se dice popularmente: "es lo que hay".

Quizás la primera tarea de este gabinete (por la coyuntura política, sin mucha vocación de permanencia y un alto grado de fragilidad) venga dada por la reconstrucción de algunos sectores, en los que la designación de funcionarios incompetentes (cuando no integrantes de verdaderas mafias del crimen organizado) los colocaron en una situación extremadamente crítica (salud, agricultura, vivienda, transportes, migraciones, etcétera).



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

La segunda, recuperar en la medida de lo posible el tiempo perdido (casi un año y medio de parálisis absoluta, en razón también de lo anterior) y retomar el rumbo correcto. Se dice fácil, pero será muy difícil, el daño ocasionado por la ineptitud del anterior "gobernante" y de los cuadros colocados exprofesamente para ello harán la tarea muy cuesta arriba, pero debe al menos intentarse.

En simultáneo, el Legislativo (tan inepto o más de lo habitual, falto de reflejos y sin ningún propósito de enmienda) deberá terminar de aprobar la reforma constitucional para el tan ansiado adelanto de elecciones (lo que necesariamente traerá aparejado el recorte del mandato presidencial y congresal). ¿Lo conseguirá?

Es verdad que hay un tema legal o técnico para que lo anterior ocurra (el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones establece un plazo mínimo de 270 días para que estas se lleven a cabo desde que son convocadas), sin embargo, debe hacerse el esfuerzo. La grave crisis política, alimentada por las narrativas de la extrema izquierda (necesidad de una asamblea constituyente y nueva constitución) y de la extrema derecha (la reaparición de Sendero Luminoso, el comunismo recalcitrante y sus sucedáneos) hace inviable la continuidad del mandato de la actual presidenta y del Congreso.

## ***Recovering the time lost***

*"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts"*

Bertrand Russell

**A**fter only 13 days from taking office, the second Ministerial Cabinet of President Dina Boluarte has been sworn in, following the removal of former president Pedro Castillo by the Congress of the Republic as a result of the failed coup he tried to perpetrate with a message to the nation broadcasted last December 7.

The head of the new cabinet is attorney Alberto Otarola, Minister of Defense in former president Ollanta Humala's administration; he was appointed amidst huge social convulsion - which has taken the lives of approximately 25 people. This cabinet consists, among others, of some specialists who come from and have been trained in the sectors they now run. Due to the serious circumstances we are going through, it does not generate expectations, but, in plain language, "it is what it is".

Possibly, the first task of this cabinet (due to the political situation, with a low calling for permanence and a high degree of frailty) will be the restructuring of some sectors in which the appointment of incompetent officials (or members of true organized crime mafias at worst) placed them in an extremely critical position (health, agriculture, housing, transport, migrations, etc.)

The second would be to recover the time lost, as far as possible, (almost a year and a half of full paralysis, also due to the aforementioned reasons) and return to the

right course. It is easier said than done, as the damage caused by the unsuitability of the former "leader" and the officials intentionally appointed for that purpose will make this task significantly difficult, but at least an attempt should be made.

Simultaneously, the Legislative branch (as unfit as usual or even more, response-defective and with a complete lack of self-correction) shall finally approve the constitutional reform for the highly anticipated calling for snap elections (which will necessarily lead to the cutback of the presidential and congressional term). Will it be able to achieve this?

Indeed, there is a legal and technical matter as a previous condition (Article 82 of Organic Election Act sets out a minimum 270-day term for an election to take place since called). However, efforts must be done. The serious political crisis, fueled by the narrative from the extreme left (the need of a constituent assembly and a new Constitution) and from the extreme right (the reappearance of Sendero Luminoso (Shining Path), recalcitrant communism and its surrogates), makes the continuity of the current presidential and congressional term impracticable. ||



# Entre lo privado y lo público: ¿El área legal de un banco y de una entidad estatal pueden tener el mismo enfoque?

**U**n banco en el Perú, de manera general, es una empresa que participa en un mercado supervisado, con agentes superavitarios —gente que tiene dinero y quiere invertirlo— y deficitarios —gente que no tiene dinero y requiere financiamiento—, donde la asunción de “riesgos” es un componente inherente a ese mercado y donde la dinámica de esa industria exige tener un desempeño ágil para brindar el mejor servicio posible a los clientes o usuarios y no ser fácilmente desplazado por otro actor (banco).

Por otro lado, una entidad estatal, de manera general, es una organización que solo cumple determinada finalidad y funciones establecidas de forma expresa en una norma legal. No es actor de ningún mercado, sino más bien, en algunos casos, supervisa o regula un mercado. El componente “autoridad” es parte de su esencia y su ámbito de acción exige tener un desempeño prudente frente a los administrados (la población).

Las diferencias entre ambas instituciones no son uniformes, hay matices debido a que el Estado participa en la economía y, además, porque dentro de ese rol se ha dedicado a ser empresario, bajo parámetros constitucionales y legales. En esa línea, nuestro país se caracteriza por tener empresas públicas con mandatos concretos que definen su ámbito de acción. Dentro de esas empresas se tienen a las financieras. Existen las cajas municipales, vinculadas a los gobiernos locales; y algunos bancos, que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – Fonafe, empresa holding del Poder Ejecutivo.

En el caso de los bancos del Estado, encontramos a Cofide, Mivivienda, Agrobanco y el Banco de la Nación. De los cuatro, el más parecido a un banco comercial privado es el último. El Banco de la Nación está sujeto a la regulación bancaria, además

de la regulación del mercado de valores -por tener instrumentos listados- como cualquier banco privado; y, a su vez, está sujeto a la legislación del sector público, que demanda procesos especiales para sus contrataciones, gestión de recursos humanos, auditorías, entre otros rubros. Ello hace que sea una de las organizaciones más supervisadas, si es que no es la más supervisada del país. No solo la SBS y el BCRP, como en el caso de los bancos privados, tienen regulación que aplica al Banco de la Nación, sino que también la tienen el OSCE, la CGR, Fonafe, la PCM, el MEF —por integrar dicho sector—, entre otros.

En buena cuenta, el Banco de la Nación tiene que sobrellevar una alta carga regulatoria entre lo privado y lo público; y eso no necesariamente está mal, de hecho, el estricto control de la “cosa pública” es quizás uno de los factores que ha determinado que esta sea una de las empresas más solventes del país en los últimos diez años. Dentro de su engranaje organizacional, el área legal de este banco cumple un rol fundamental. Sin embargo, en esa dualidad que caracteriza a la regulación del banco, es fundamental que se tenga claro el enfoque que debe mantener la gestión de dicha área.

El Banco de la Nación es por sobre todo una empresa, así está definido estatutariamente; y las empresas en cualquier parte del mundo tienen fin lucrativo, es decir, buscan maximizar sus ingresos. Claro está que la rentabilidad social también es un factor a considerar al momento de planear y dirigir las actividades de este banco, pero no es el principal. En ese sentido, la asesoría que debe prestar el área legal se centra en el negocio bancario. Ello teniendo siempre presente preceptos inobjetables como la participación subsidiaria del banco en el mercado financiero o el sustento legal de cada paso que se da.

El área legal debe conocer el negocio bancario para que su asesoría sea efectiva. Tener claro cuáles son las fortalezas y debilidades del banco, los riesgos más relevantes a los que está expuesto y, sobre todo, buscar adelantarse a su concreción y prevenirlo de la manera más ágil posible. La industria financiera es sumamente dinámica, demanda que todos sus actores reaccionen con rapidez ante la evolución del mercado. Ello hace necesario que el soporte legal que esos actores tienen sea flexible y a su vez confiable y seguro. Esto no es ajeno en la banca pública y, más bien en este caso, demanda un esfuerzo aún mayor del asesor jurídico, que tiene que estar a la vanguardia de lo exigido por el mundo financiero, pero a su vez, asegurándoles a los que toman las principales

decisiones que, siguiendo las recomendaciones legales, no estarán expuestos a perder sus empleos, a la reducción de sus patrimonios personales o, inclusive, a la pérdida de su propia libertad por la gestión incorrecta de fondos públicos.

Ese es el enfoque que tiene el área legal de un banco público y que, en lo medular, no dista mucho del que pueda tener la misma área de un banco privado. ▶

---

**Un banco en el Perú  
es una empresa  
que participa en un  
mercado supervisado,  
con agentes  
superavitarios y  
deficitarios, donde la  
asunción de “riesgos”  
es un componente  
inherente a ese  
mercado y donde la  
dinámica de esa  
industria exige tener  
un desempeño ágil  
para brindar el mejor  
servicio posible a los  
clientes o usuarios  
y no ser fácilmente  
desplazado por otro  
actor (banco).**

---



JUAN CARLOS BUSTAMANTE  
Gerente legal  
Banco de la Nación

## ***Between private and public: Can the legal department of a bank and a state entity have the same approach?***

**I**n Peru, a bank is, in general, a company that participates in a supervised market, with surplus agents –people who have money and want to invest it– and deficit agents –people who do not have money and require financing–, where taking “risks” is an inherent component of said market and the dynamics of that industry demand an agile performance so as to provide the best service possible to clients or users and not be easily displaced by another actor (bank).

Conversely, a state entity is, in general terms, an organization that fulfills only certain purposes and functions expressly set out in a legal regulation. It is not an actor in any market, but rather supervises or regulates a market in some cases. The “authority” component is part of its essence and its scope of action requires cautious performance towards the people they serve (the population).

The differences between both types of institutions are not even; there are nuances due to the participation of the State in the economy and, in addition, because it has engaged in entrepreneurship under constitutional and legal parameters. Along these lines, our country has public companies with specific mandates which define their scope of action. Financial institutions fall into this category. There are municipal savings banks, linked to local governments, and some banks, under the scope of the Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (National Fund for State's Entrepreneurial Activity Financing) (FONAFE, acronym in Spanish), a holding company of the Executive Branch.

The state banks are the following: Cofide, Mivivienda, Agrobanco and Banco de la Nación. From all of them, the last one is the most similar to a private commercial bank. Banco de la Nación is subject to banking regulations, in addition to stock market regulations like any private bank, since it has listed instruments. In turn, it is subject to public sector legislation, which requires special processes for hiring, human resource management, audits, among others. This makes it one of the most supervised organizations, if not the most supervised in the country. As in the case of private banks, not only does the SBS and the BCRP have regulations that apply to Banco de la Nación, but also the OSCE, the CGR, Fonafe, the PCM, the MEF, among others, since they make part of that sector.

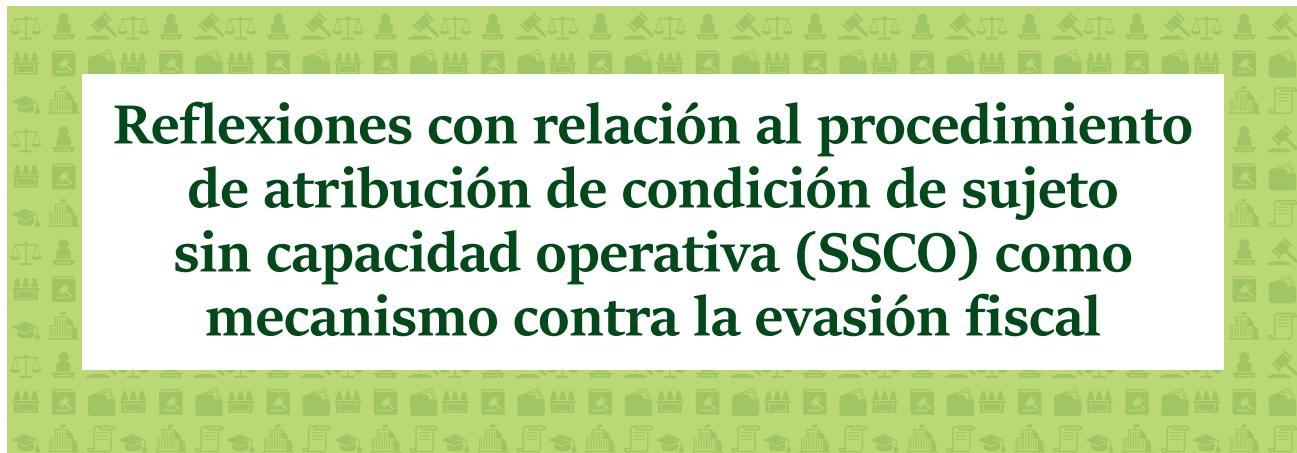
In general, Banco de la Nación has to bear a high regulatory burden between the private and the public sector; and

this is not necessarily bad. In fact, the strict control of the “public sector” is, perhaps, one of the factors that has made it one of the most financially sound companies in the country in the last ten years. The legal area of this bank plays a fundamental role within its organizational structure. However, in the duality of the bank's regulation, it is essential to be clear about the approach the management of this area must observe.

Banco de la Nación is overall a company, as defined by its bylaws; and companies anywhere in the world are profit-making, i.e., they seek to maximize their income. Of course, social profitability is also a factor to consider when planning and directing the activities of this bank, but not the most important. In that sense, the advice to be provided by the legal area is focused on the banking business. This always bearing in mind unobjectionable precepts such as the bank's subsidiary participation in the financial market or the legal basis for each step taken.

The legal area must know of the banking business for its advice to be effective. It must be clear about the bank's strengths and weaknesses, what are the most relevant risks it is exposed to and, especially, try to anticipate and prevent them as fast as possible. The financial industry is highly dynamic, requiring all players to quickly react to the market evolution. This makes flexible, reliable and safe legal support of these actors a must. This is no stranger to public banking and, in this case, it demands an even greater effort from the legal counsel, who must be at the forefront of the financial world's requirements. At the same time, he must assure the key decision-makers that, if they follow the legal recommendations, they will not be risk to lose their jobs, see their personal assets reduced or even lose their own freedom due to the improper management of public funds.

This is the approach of a public bank's legal department and, at its core, it does not differ much from that of the same department of a private bank. ))



## Reflexiones con relación al procedimiento de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa (SSCO) como mecanismo contra la evasión fiscal

Ante el creciente nivel de informalidad y evasión tributaria en el Perú, el Gobierno publicó el 19 de marzo de 2022, el Decreto Legislativo n.º 1532, mediante el cual se aprueba el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa como mecanismo de lucha frontal contra la evasión fiscal. Dicha norma entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.

La norma bajo comentario tiene por finalidad establecer un procedimiento mediante el cual, después de un análisis objetivo, la Sunat otorgue dicha condición a sujetos que si bien están registrados formalmente como contribuyentes, tienen RUC activo y figuran como emisores de comprobantes de pago, en la realidad no cuentan con los recursos económicos, financieros, materiales, de infraestructura, humanos, entre otros, o los mismos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Esto es lo que en materia tributaria se denomina “operaciones no reales”.

Ahora bien, en caso la Sunat evidencie la existencia de los indicadores antes señalados deberá seguir un procedimiento sencillo con la finalidad de atribuir la referida condición de sujeto sin capacidad operativa.

En efecto, de darse los supuestos mencionados, la Sunat procederá a notificar al contribuyente evaluado un requerimiento de información, otorgándole un plazo de treinta (30) días hábiles para que presente los medios probatorios que desvirtúen las situaciones comunicadas en el requerimiento. Una vez cumplido el plazo antes señalado, la Sunat procederá a: (i) señalar que se han desvirtuado las situaciones detectadas o (ii) señalar que no se han desvirtuado las situaciones detectadas, en cuyo caso emitirá una resolución, la misma que podrá ser impugnada por el contribuyente mediante un recurso de reclamación y posteriormente apelación ante el Tribunal Fiscal.

Una vez que la resolución que atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa haya quedado firme por no impugnarse o se agote la vía administrativa, la Sunat procederá a su publicación en el diario oficial El Peruano y su página web.

La publicación de la condición de sujeto sin capacidad operativa genera las siguientes consecuencias:

- (i) La baja de las series de los comprobantes de pago físicos y de los documentos complementarios físicos.
- (ii) El sujeto sin capacidad operativa solo podrá emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas a aquellas, hasta que venza el plazo que establecerá el reglamento.
- (iii) Las operaciones que se realicen con el sujeto sin capacidad operativa no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho o beneficio derivado del IGV o sustentar costo o gasto para efectos del impuesto a la renta.



Como se puede observar, la consecuencia de la sanción, no solo perjudica al infractor, sino también a los contribuyentes que utilizaron sus comprobantes de pago para sustentar costo/gasto, crédito fiscal o algún beneficio del IGV.

Ante esta “sanción anómala”, la norma ha establecido un procedimiento para que los terceros perjudicados puedan solicitar a la Sunat la revisión de los comprobantes emitidos por los sujetos sin capacidad operativa, para lo cual se otorga un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de la condición de sujeto sin capacidad operativa.

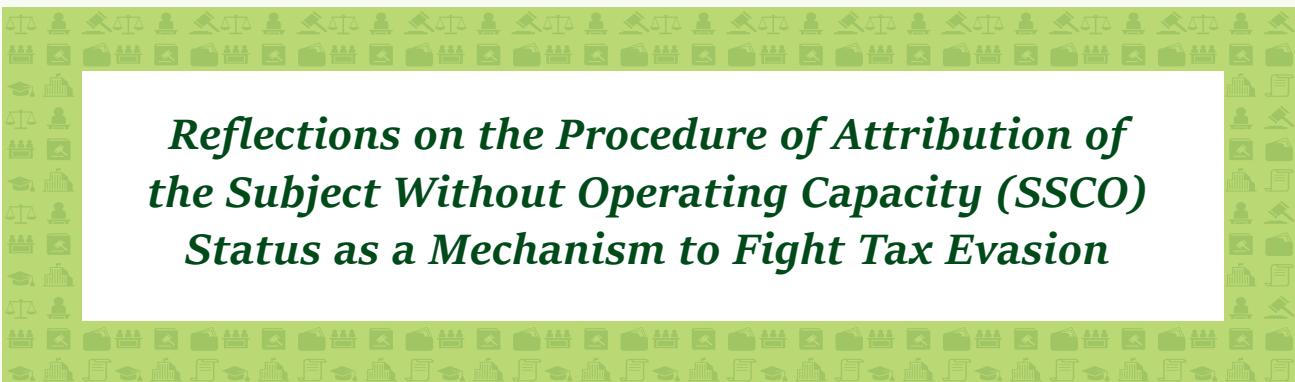
En dicho escenario, la Sunat iniciará un procedimiento de fiscalización parcial, la misma que finalizará con una resolución de determinación, donde el ente fiscal determinará la fehaciencia de las operaciones materia de revisión y, de esta manera, evitar su cuestionamiento dentro de un procedimiento de fiscalización.

Finalmente, es importante señalar que, la primera disposición complementaria final de la norma bajo comentario establece que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023 y será aplicable a los comprobantes de pago y documentos complementarios que se emitan a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Lo anterior implica que los comprobantes de pago emitidos a partir del 20 de marzo de 2022, incluso antes de la entrada en vigencia de la norma, se regirán bajo el procedimiento de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa, una situación, sin duda, cuestionable. ¶



CÉSAR CASTILLO DEL ÁGUILA  
Asociado, especialista en derecho tributario  
*Member, Tax Law expert*  
ccastillod@munizlaw.com



## ***Reflections on the Procedure of Attribution of the Subject Without Operating Capacity (SSCO) Status as a Mechanism to Fight Tax Evasion***

**O**n March 19, 2022, the Government published Legislative Decree No. 1532, which approves the procedure of attribution of the subject without operating capacity status as a mechanism to frontal fight tax evasion, due to the increasing level of informality and tax evasion in Peru. This rule will become effective on January 1, 2023.

The purpose of the rule under discussion is to establish a procedure whereby Sunat, after an objective analysis, grants such status to subjects formally registered as taxpayers, with an active Taxpayer ID (RUC) and appearing as invoice issuers, but do not really have economic, financial, material, infrastructure, human resources, among others, or these resources are not suitable to carry out the operations they issue said documents for. In taxation, this is called "inexistent operations".

That being said, in case Sunat proves the existence of the aforementioned indicators, it should follow a simple procedure to attribute the status of subject without operating capacity.

Indeed, if the assumptions mentioned occur, Sunat will serve notice of a requirement for information to the taxpayer under evaluation, granting them a thirty (30) business days period to submit the evidence disproving the situations reported in the requirement. Once said term has expired, Sunat will proceed to: (i) indicate the situations detected have been disproved or, (ii) indicate the situations detected have not been disproved, in which case it will issue a resolution which may be challenged by the taxpayer by means of a claim and later appeal before the Federal Tax Court.

Once the resolution attributing the status of subject without operating capacity becomes final because either it was not challenged or the administrative proceedings were exhausted, Sunat will publish it in *El Peruano Official Journal* as well as in its website.

The publication of the subject without operating capacity status leads to the following consequences:

- (i) The cancellation of the series of physical invoices and physical complementary documents.
- (ii) The subject without operating capacity may only issue sales receipts and debit and credit notes related to them until the expiration of the period set out in the regulations.
- (iii) The operations made with the subject without operating capacity forbid the exercise of the right to tax credit or any other right or benefit derived from the VAT or proving costs or expenses for income tax purposes.

As it can be seen, the consequence of the sanction is not only detrimental to the offender, but also to the taxpayers who used their invoices to proof costs/expenses, tax credit or any VAT benefit.

In view of this "anomalous sanction", the rule sets out a procedure for third parties to request Sunat to review the invoices issued by parties without operating capacity, in which a thirty (30) business day term is granted following the publication of the subject without operating capacity status.

In that scenario, Sunat will initiate a partial audit procedure, which will end with a determination resolution, where the tax authority will determine the validity of the operations under review and, thus, avoid its dispute within an audit procedure.

Finally, it is worth pointing out that the first final complementary provision of the rule under discussion sets out that it will become effective on January 1, 2023, and will be applicable to invoices and complementary documents issued from the day following its publication in *El Peruano Official Journal*.

This implies that invoices issued from March 20, 2022, even before the rule became effective, will be governed under the procedure to attribute the subject without operating capacity status, a situation that is undoubtedly questionable. ☺



# Fiscalización ambiental en el sector transportes

Para consolidar el rol normativo del Estado en procura del interés público de protección al ambiente, salvaguardando el derecho de las personas a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, es necesaria la fiscalización ambiental. Esta comprende las funciones de evaluación (vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental), supervisión de las obligaciones ambientales y el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.

Una fiscalización eficiente debe considerar como mínimo tres aspectos claves: reglas claras que la hagan previsible y no arbitraria; una buena coordinación entre las autoridades de certificación y fiscalización ambiental; y, una adecuada certificación o aprobación del instrumento de gestión ambiental, que contenga claramente los compromisos ambientales. En tal sentido, abordaremos el primero de estos aspectos por estar relacionado con la predictibilidad que debe brindar la Administración en el ejercicio de sus funciones.

En materia ambiental, las obligaciones fiscalizables se encuentran contenidas en la normativa ambiental sectorial, en la normativa de carácter transversal (en residuos sólidos, ruidos, suelos, efluentes, etc.), en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, sus modificaciones o actualizaciones, y en las medidas administrativas dictadas.

A nivel sectorial, el Decreto Supremo n.º 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, establece, entre otros, las responsabilidades y obligaciones de los titulares de estas actividades.

Además, para el ejercicio de la fiscalización ambiental, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) –como entidad de fiscalización ambiental en tanto se haga efectiva la transferencia al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)– aplica la normativa sectorial en supervisión y fiscalización ambiental (Decreto Supremo n.º 021-2021-MTC), en sanciones e incentivos (Decreto Supremo n.º 015-

2022-MTC), y en materia de denuncias ambientales (Resolución Directoral n.º 0742-2021-MTC/16); así como, supletoriamente, la normativa del OEFA.

Ahora bien, del citado marco normativo consideramos importante comentar el Decreto Supremo n.º 015-2022-MTC, Reglamento de Sanciones y Régimen de Incentivos (publicado el 11 de septiembre de 2022), en la medida que hemos advertido ciertas incongruencias en la tipificación de infracciones que pueden afectar la fiscalización ambiental.

En algunos casos, observamos que sobre la base de una misma obligación ambiental se ha determinado más de un tipo infractor con sanciones diferentes, pero no se aprecia la razonabilidad de su distinción ni los criterios de interpretación para su aplicación.

Por ejemplo, con relación a la obligación vinculada a monitoreos ambientales, por un lado, se señala que no remitir los resultados de los monitoreos en la forma y plazo según el instrumento ambiental y la normativa vigente puede acarrear una amonestación escrita o una multa de hasta 100 UIT (ítem 8.2); y, por otro, no presentar los monitoreos, los reportes de análisis y ensayos en un determinado plazo y periodo, puede acarrear una multa de hasta 10000 UIT (ítem 15.14). Asimismo, no realizar monitoreos en la forma, plazo, frecuencia y otros, según el instrumento ambiental, puede acarrear una amonestación escrita o una multa de hasta 100 UIT (ítem 8.1); y no realizar monitoreos de efluentes y emisiones en la frecuencia y ubicación aprobada, puede acarrear una multa de hasta 10000 UIT (ítem 15.13).

Otro ejemplo que podemos citar es el relacionado con la implementación de mecanismos de participación ciudadana durante la ejecución del proyecto de inversión, que forman parte de los compromisos y obligaciones del plan de gestión social del instrumento ambiental aprobado; y, con las obligaciones sociales establecidas en este. El incumplimiento en el primer caso puede acarrear una multa de hasta 10000 UIT (ítem 14.1); y, en el segundo, una amonestación escrita o una multa de hasta 100 UIT (ítem 17.1).

En qué supuesto se aplicará uno u otro tipo infractor y su escala de sanciones dependerá de la discrecionalidad de la autoridad en el caso concreto para calificar la gravedad de la conducta infractora y los argumentos de defensa del imputado sobre los hechos que motivan el inicio del procedimiento sancionador.

Ello no se condice con establecer reglas claras que hagan previsible la fiscalización ambiental para garantizar que esta sea eficiente y no caiga en vicios de nulidad; por lo que, sin perjuicio de las acciones normativas a realizar para generar mayor predictibilidad, en el ejercicio de su potestad sancionadora administrativa, la autoridad deberá atender principalmente a la razonabilidad de los medios que emplea y el fin público de protección ambiental que busca tutelar. |||

---

**Una fiscalización eficiente debe considerar como mínimo tres aspectos claves: reglas claras que la hagan previsible y no arbitraria; una buena coordinación entre las autoridades de certificación y fiscalización ambiental; y, una adecuada certificación o aprobación del instrumento de gestión ambiental, que contenga claramente los compromisos ambientales.**

---



**CECILIA TORRE SANDOVAL**

Asociada senior, especialista en derecho ambiental

*Senior member, environmental rights expert*

ctorre@munizlaw.com

## ***Environmental Inspection in the Transport Sector***

**T**he environmental inspection is necessary to solidify the regulatory role of the State in ensuring the public interest for environmental protection, thus preserving people's right to live in a balanced and safe environment. It consists of the assessment duties (environmental quality surveillance and monitoring), environmental duties oversight and exercise of legal authority to impose sanctions.

An efficient inspection should consider at least three key points: clear rules to make it predictable and non-arbitrary; well-managed coordination between certifying authorities and environmental inspectors; and proper certification or approval of the environmental management instrument containing the environmental commitments clearly explained. In this regard, we will address the first of this points as it is related with the predictability the Administration must provide in the course of its duties.

In environmental matters, the duties subject to inspection are contained in the sector's environmental regulations, in the cross-section regulations (for solid waste, noise, soils, effluents, etc.), in the approved environmental management instruments, their modifications or updates, and in the administrative measures taken.

On a sectoral level, Supreme Decree No. 004-2017-MTC approving the Environmental Protection Regulations for the Transport Sector sets out the responsibilities and duties of those in charge of these activities, among other things.

Furthermore, for the performance of the environmental inspection, the Ministry of Transport and Communications (MTC, acronym in Spanish) –as the environmental inspection body while the transfer is done to the Agency for Environmental Assessment and Enforcement (OEFA, acronym in Spanish)– applies the sector regulations in environmental inspection and oversight (Supreme Decree No. 021-2021-MTC), sanctions and incentives (Supreme Decree No 015-2022-MTC), and environmental complaints (Board Resolution No. 0742-2021-MTC/16); as well as OEFA's regulations, supplementarily.

Now, from the aforementioned regulatory framework, we consider worth mentioning Supreme Decree No. 015-2022-MTC, Regulations on Sanctions and Incentive Regime (published on September 11, 2022), as we have noticed some inconsistencies in the classification of infractions which may affect the environmental inspection.

In some cases, more than one infringement type with different sanctions has been determined based on the same environmental duty, but the reasoning for its difference or the interpretation criteria for its application cannot be seen.

For example, regarding the duty related to environmental monitoring, it is stated - on one hand - that failure to submit the monitoring results in the form and term pursuant to the environmental instrument and current regulations may result in a written warning or a fine of up to 100 UIT (Peruvian Taxation Units) (item 8.2); and, on the other hand, failure to submit the monitoring, analysis and test reports within a specific term and period may result in a fine of up to 10000 UIT (item 15.14). Likewise, failure to carry out monitoring in the form, term, frequency and others, according to the environmental instrument, may result in a written warning or a fine of up to 100 UIT (item 8.1); and failure to monitor effluents and emissions in the approved frequency and location, may result in a fine of up to 10000 ITU (item 15.13).

Another example is related to the implementation of citizen participation mechanisms during the execution of the investment project. These are part of the commitments and obligations of the social management plan of the approved environmental instrument and have the social duties set out in it. In the first case, non-compliance may result in a fine of up to 10,000 ITU (item 14.1); and, in the second case, in a written warning or a fine of up to 100 ITU (item 17.1).

The application of one infringement type or the other, as well as the sanction scale, will depend on the authority's discretion, specifically when qualifying the seriousness of the infringement and the defense arguments of the accused regarding the facts that cause the start of the sanctioning procedure.

This contradicts setting out clear rules that make environmental inspection predictable to ensure its efficiency and to prevent it from falling into a process of annulment. Therefore, notwithstanding of the regulatory actions to be taken to generate greater predictability, and in the exercise of its legal authority to impose sanctions, the authority should primarily be reasonable regarding the means used and observe the public purpose of protecting the environment. ¶

# LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA EFICIENTE PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

## Inteligencia Artificial (IA)

"Hasta la fecha, no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo; pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos" es la frase atribuida al matemático estadounidense Marvin Minsky (1927-2016), uno de los mayores impulsores del desarrollo tecnológico del siglo XX y que acuñó el término Inteligencia Artificial (IA). El Parlamento de la Unión Europea define la IA como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear.

La IA permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. La máquina recibe datos (ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores, por ejemplo, una cámara), los procesa y responde a ellos.

Los sistemas de IA son capaces de adaptar su comportamiento en cierta medida, analizar los efectos de acciones previas y de trabajar de manera autónoma.

Según la definición de la Comisión Europea, podemos clasificar la IA en 2 tipos:

- Software: asistentes virtuales, software de análisis de imágenes, motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento de voz y rostro
- Inteligencia artificial integrada: robots, drones, vehículos autónomos, internet de las cosas.



En nuestro día a día encontramos la IA en innumerables procesos como: compras por internet y publicidad, búsquedas en la web, asistentes personales digitales, traducciones automáticas, casas, ciudades e infraestructuras inteligentes, vehículos, ciberseguridad, e incluso para luchar contra la covid-19 utilizándola en las cámaras termográficas instaladas en los aeropuertos y en otros lugares. La pregunta que todos nos hacemos es ¿La IA es una herramienta eficiente que nos permita cumplir con los objetivos de compliance?

### **Aplicación de la IA a los programas de compliance**

De acuerdo a los "Lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención", publicado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú, las organizaciones implementan un modelo de prevención, con el fin de prevenir la comisión de delitos y es el órgano de gobierno quien lidera la cultura de integridad y prevención en todos los niveles de la organización, por lo que todas las acciones que se encuentran orientadas a la implementación y funcionamiento del modelo de prevención deben estar precedidas por su compromiso, liderazgo y apoyo firme, el cual debe ser activo y visible.

En ese orden de ideas, prevenir la comisión de delitos en el seno de las organizaciones es una tarea enorme y conlleva costos y riesgos sustanciales, incluidos, entre otros, los riesgos regulatorios, de reputación, de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La gestión de estos riesgos recae en los programas de compliance y bajo una visión holística del compliance, recae bajo la responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización.

El error humano juega un papel preponderante en este contexto debido a que puede costar grandes sumas de dinero a las organizaciones y la prevención es imperativa. Las organizaciones se encuentran obligadas a rastrear, administrar y analizar un gran volumen de datos sobre clientes y operaciones. La cantidad de información aumenta las posibilidades de error humano cuando los procesos son manuales. Las tecnologías de IA pueden arrojar luz sobre puntos ciegos, errores razonables y otras cosas que los humanos no necesariamente pueden detectar.

En mi opinión, la IA es una herramienta que brinda reducción de costos y riesgos, sin embargo, no debemos dejarla sola, se recomienda utilizar la experiencia humana y experiencia en los procesos de la empresa para aprovechar todos los recursos. Estas tecnologías se encuentran aún en desarrollo, la unión de ambas (máquinas y humanos) es lo que hará que la IA tenga éxito y permita cumplir con los objetivos de compliance.



**MARCO RUIZ MARTÍNEZ**

Asociado, especialista en Compliance y derecho penal  
**Member, Compliance and Criminal Law expert**  
[mruizm@munizlaw.com](mailto:mruizm@munizlaw.com)





# Artificial Intelligence as an Efficient Tool for Compliance Programs

## Artificial Intelligence (AI)

"To date, no computer has ever been designed that is ever aware of what it's doing; but most of the time, we aren't either". This quote is attributed to the American mathematician Marvin Minsky (1927-2016), one of the greatest drivers of technological development in the 20th century; he coined the term Artificial Intelligence (AI).

The European Union Parliament defines AI as the ability of a machine to exhibit the same capabilities as humans, such as reasoning, learning, creativity and planning.

AI allows technological systems to perceive their environment, interact with it, solve problems and act for a specific purpose. The machine receives data (already prepared or collected through its own sensors, e.g., a camera), processes it and responds to it.

AI systems have the ability to adapt their behavior to a certain extent, analyze the effects of previous actions and work autonomously.

According to the European Commission's definition, AI can be classified into 2 types:

- Software: virtual assistants, image analysis software, searching engines, voice and face recognition systems.
- Integrated artificial intelligence: robots, drones, autonomous vehicles, and internet of things.

In the day to day, we find AI in multiples processes such as: online shopping and advertising; web searches; digital personal assistants; automatic translations; smart homes, cities and infrastructure; vehicles; cybersecurity; and even in the fight against Covid-19 with the use of thermographic cameras installed in airports and other places. The burning question here is: Is AI an efficient tool that will allow us to meet compliance purposes?

## Application of AI to compliance programs

According to the "Guidelines for the Implementation and Operation of the Prevention Model", published by the Peruvian Superintendence of the Securities Market (SMV), organizations implement a prevention model in order to prevent crimes. It is the governing body leading the culture of integrity and prevention at all levels of the organization, so all actions aimed at the implementation and operation of the prevention model must be preceded by active and visible commitment, leadership and strong support.

In that sense, preventing the commission of crimes within organizations is a huge task and entails substantial costs and risks including, among others, regulatory, reputation, corruption, money laundering and terrorist financing risks. The management of these risks lies in the compliance programs and, from a holistic point of view of compliance lies in the responsibility of each of the organization members.

Human error plays an important role in this context because it can cost organizations large amounts of money and prevention is imperative. Organizations have the obligation to track, manage and analyze a large volume of customer and operational data. The amount of information increases the chances of human error in man-made processes. AI technologies can shed some light on blind spots, reasonable errors and other things that humans not always detect.

In my opinion, AI is a tool that provides cost and risk reduction; however, we should not let it work unattended. The use of human expertise and experience in the company's processes is recommended to take advantage of all resources. These technologies are still in development. The union of both (machines and humans) will make AI succeed and will allow meeting compliance objectives. |||



# Ley n.º 31591: REFORMA DE LA APELACIÓN Y LA CASACIÓN CIVIL

Lima, viernes 4 de noviembre de 2022

## Alerta Litigios y Controversias

Comunicamos a nuestros clientes que el 26 de octubre de 2022 ha sido publicada, en el diario oficial El Peruano, la Ley n.º 31591, dispositivo legal que modifica diversos artículos del Texto Único Ordenado Código Procesal Civil.

### ¿Cuáles son las modificaciones con mayor relevancia?

- a) **Se elimina la modalidad de impugnación, denominada “adhesión al recurso de apelación”**, modificándose al efecto los artículos 367, 370, 373 y 376 del T.U.O del Código Procesal Civil.

Se debe precisar que la adhesión al recurso de apelación (también conocida como “apelación derivada”), es uno de los tipos de impugnación que se emplea en aquellos casos en los que una resolución judicial genera agravio a ambas partes del proceso; siendo que, interpuesto el recurso por una de estas (concedido y corrido traslado del mismo), la otra parte tiene la posibilidad de adherirse a este, solicitando que se modifique o revoque la resolución recurrida en todo aquello que le resulte perjudicial.<sup>1</sup>

- b) **Nuevos requisitos de procedencia del recurso de casación:** modificación del artículo 386 del T.U.O del Código Procesal Civil.

En el numeral 2 del artículo de reforma en referencia se establece lo siguiente:

- “[...] 2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que:  
 a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 URP que la pretensión sea inestimable en dinero;  
 b. el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia,  
 c. el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. [...]”.

Como se advierte, uno de los nuevos requisitos de procedencia del recurso de casación es que la pretensión que se discuta en la sentencia y/o auto sea mayor a la suma de **S/ 230,000.00 (importe estimado sobre el valor de las 500 URP al día de hoy, ...)**; vale decir, el legislador ha optado por incorporar – nuevamente – la summa graviminis.

En adición a ello, en el numeral 2.b, **el legislador ha implementado el “doble conforme”**; vale decir, solo se podrá interponer el recurso de casación contra sentencias de segunda instancia que revoquen en parte o de manera total la decisión de primera instancia. En aquellos casos en los que la Sala Superior confirme el pronunciamiento del juzgado, no será posible recurrir a la Corte Suprema.

Esta modificación supondrá un intento para que la Corte Suprema se convierta en una auténtica Corte de Casación.

### ¿Cuándo entra en vigor la ley?

La ley entró en vigor el 27 de octubre de 2022.

Para conocer las otras modificaciones, lo invitamos a visitar nuestra página web, donde encontrará la alerta legal completa.

<sup>1</sup> División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. Manual del Proceso Civil. Todas las Figuras Procesales a través de sus fuentes doctrinarias y jurisprudenciales. 2015. Lima: Gaceta Jurídica, Volumen I, Tomo I, p. 729.

# ACT No. 31591: REFORM OF APPEALS AND APPEALS FOR REVERSAL

Lima, November 4, 2022

## **Litigation and Dispute Alert**

We inform our clients that Act No. 31591 has been published on October 26, 2022, in *El Peruano Official Journal*. This legal provision amends several articles of the Unique Consolidated Text of the Code of Civil Procedures.

### **Which are the most relevant amendments?**

- The challenge type, called “adherence to appeals” has been eliminated,** thus modifying articles 367, 370, 373, and 376 of the Unique Consolidated Text of the Code of Civil Procedures.

It should be noted that adherence to appeals (aka “derived appeal”) is one of the challenge types used in cases in which a decision is against both parties of the process. The recourse (granted and notified) is brought by one of the parties, and the other party has the possibility of adhering and requesting the modification or dismissal of the decision regarding anything that may be to the detriment of said party.<sup>1</sup>

- New admissibility requirements for the appeal for reversal:** modification of article 386 of the Unique Consolidated Text of the Code of Civil Procedures.

The following is set out in number 2 of the referred reform article:

“[...] 2. The appeal for reversal is admitted as per the assumptions in the previous paragraph, provided that:

- a petition higher than 500 URP (Spanish acronym for Procedural Reference Units) is discussed in the decree or order or the petition is invaluable in money;
- b. the judgement at second instance partially or totally revokes the decision at first instance;
- c. the judgement at second instance does not cause annulment. [..]”.

As it can be seen, one of the new admissibility requirements for the appeal for reversal is that the petition discussed in the decree and/or petition be higher than S/230,000.00 (estimated amount on the value of 500 URP as of today,...); i.e., the legislator has added - again - the *summa gravaminis*.

In addition, the legislator has implemented, in paragraph 2.b, the “double conformity”; i.e., the appeal for reversal may only be brought against second-instance decrees that partially or totally revoke the decision at first instance. For those cases in which the Superior Court confirms the court’s judgement, appealing to the Supreme Court will not be possible.

This modification will be an attempt to turn the Supreme Court into a true Appeal for Reversal Court.

### **When does this act become effective?**

It became effective on October 27, 2022.

To learn the other amendments, we invite you to visit our website, where you will find the full legal alert. »

<sup>1</sup> División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. *Manual del Proceso Civil. Todas las Figuras Procesales a través de sus fuentes doctrinarias y jurisprudenciales. (Manual of Civil Procedures. All the Types of Offenses through their doctrine and case law sources)*. 2015. Lima: Gaceta Jurídica, Book I, Vol. I. p. 729.



EL EXPERTO

Claudia Chávez Chávez

Socia, sede Arequipa

Partner, Arequipa office

cchavez@munizlaw.com

# Emergencia sanitaria y los aspectos laborales que se mantienen vigentes

**E**l pasado 27 de octubre, se publicó el Decreto Supremo n.º 130-2022-PCM, que deroga el Decreto Supremo n.º 016-2022-PCM, que prorrogó el estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19, derogando también todas sus prórrogas y modificaciones.

Inicialmente, con las declaraciones preliminares del Ejecutivo respecto a la derogatoria del estado de emergencia se generó la confusión que se trataba del estado de emergencia sanitaria, y entraron en cuestionamiento el cese de diversos efectos laborales que ambas emergencias -tanto la sanitaria como la nacional- llevan consigo.

Con la derogatoria del estado de emergencia nacional, han cesado algunas obligaciones en el ámbito laboral; sin embargo, hay disposiciones que aún mantienen su vigencia debido a que no se ha derogado la Resolución Ministerial n.º 1275-2021-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial n.º 675-2022-MINSA, que regulan el Plan de Vigilancia, Control y Prevención de Contagio de COVID-19 en el Trabajo; por lo que, se mantienen vigentes algunas disposiciones:

- Ventilación en el centro de trabajo.
- Uso obligatorio de mascarilla o distanciamiento físico entre trabajadores si la medición del CO<sub>2</sub> en cada turno de trabajo no sea satisfactorio. Lo contrario, permite la eliminación del uso de mascarilla.
- Puntos de lavado y dotación de gel en el centro de trabajo.
- Toma de pruebas para detección de COVID-19 para casos sospechosos determinados por el médico ocupacional; sin embargo, el empleador puede mantener sus cronogramas de pruebas de descarte como medidas de prevención y



## EL EXPERTO

vigilancia a todos sus trabajadores.

- Llenado de la ficha de retorno para el trabajador diagnosticado con COVID-19.
- Se mantienen los programas implementados para la sensibilización a trabajadores sobre las medidas para evitar contraer COVID-19.

A diferencia, el estado de emergencia sanitaria mantiene su vigencia a razón de la ampliación emitida por Decreto Supremo n.º 015-2022-SA hasta el 24 de febrero de 2023 (180 días calendario), manteniendo así la vigencia de las medidas laborales adoptadas con la misma, tales como:

- La licencia con goce de haber compensable para los trabajadores de riesgo, salvo que estén prestando trabajo remoto o decidan retornar al trabajo presencial, para lo cual deberán suscribir previamente el formato de consentimiento respectivo.
- Trabajo remoto para trabajadores con discapacidad o trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que la naturaleza de las labores del puesto sea compatible y de común acuerdo con dicho trabajador; caso contrario, corresponderá mantener su licencia con goce de haber compensable.
- Se mantiene el trabajo remoto para trabajadoras gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su hijo/a son puestas en riesgo por el COVID-19. Sin embargo, si las labores no son compatibles con trabajo remoto, se les debe asignar labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban, evitándolas ponerlas en riesgo, o en su defecto, otorgar preferentemente licencia con goce de haber sujetas a compensación posterior.
- Los exámenes médicos preocupacionales continúan suspendidos para las actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente a trabajadores que no cuenten con examen médico ocupacional efectuado en el último año; así también, están suspendidos los exámenes médicos ocupacionales periódicos.
- Se mantiene suspendidas las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- En caso a la fecha no fuera posible realizar las elecciones de manera física o virtual para los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor, se prorroga su mandato.
- Se mantienen vigentes las facilidades laborales para el trabajador que está como única persona a cargo del cuidado y sostén de un familiar directo con COVID-19 o que sea del grupo de riesgo.
- La emisión, remisión y conservación de documentos laborales por medio virtual, así como el uso de la firma ológrafo.
- La realización virtual de actos propios de la actividad sindical, así como la remisión virtual de comunicaciones entre sindicatos y empleadores.
- La notificación electrónica por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) se mantiene vigente.
- Los empleadores pueden modificar, unilateralmente y establecer de manera escalonada, los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores como medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19.

Si bien estos aspectos laborales continúan vigentes por la emergencia sanitaria, es recomendable que el empleador vaya considerando que, en poco tiempo, pueden ser desactivadas y deberá tomar las medidas necesarias para su reactivación o suspensión, de ser el caso.



## *Health emergency and the labor aspects still in force*

**O**n October 27, Supreme Decree No. 130-2022-PCM was published, revoking Supreme Decree No. 016-2022-PCM, which extended the state of national emergency due to the circumstances affecting the life and health of people as a consequence of COVID-19; it also revoked all of its extensions and amendments.

Initially, the preliminary statements of the Executive branch revoking the state of emergency created confusion on whether it referred to the state of health emergency, and the end of various labor effects that both types of emergency - health and national - entailed was questioned.

With the state of national emergency revoked, some labor obligations have ceased; however, there are provisions still in force because Ministerial Resolution No. 1275-2021-MINSA, amended by Ministerial Resolution No. 675-2022-MINSA, regulating the Plan for Surveillance, Control and Prevention of COVID-19 Contagion in the Workplace, has not been revoked. Therefore, these provisions are still in force:

- Ventilation in the workplace.
  - Mandatory use of masks or physical distancing between workers if the CO<sub>2</sub> measurement in each work shift is not satisfactory. The opposite allows the elimination of the use of masks.
  - Washing points and gel supply in the workplace.
  - Testing for COVID-19 for suspected cases as determined by the occupational physician. However, the employer may keep screening schedules for all workers as a preventive and surveillance measure.
  - Completion of the return form for workers diagnosed with COVID-19.
  - The programs implemented to raise awareness among workers about measures to prevent contracting COVID-19 are kept.

In contrast, the state of health emergency remains in effect until February 24, 2023 (180 calendar days) due to the extension by Supreme Decree No. 015-2022-SA, thus maintaining the validity of the labor measures adopted by virtue thereof, such as:

- Compensated paid leave of absence for workers at risk, unless they are working remotely or decide to return to in-person work, for which they must previously sign the corresponding consent form.
  - Remote work for workers with disabilities or workers who care for people with disabilities up to the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity, provided that the nature of the position duties is compatible with it and in joint agreement with said worker. Otherwise, the worker's compensated paid leave of absence shall be kept.
  - Remote work is maintained for pregnant workers and nursing mothers whose integrity or that of their child is put at risk by COVID-19. However, if the work is not compatible with remote work, they should be assigned work compatible with the duties they originally



## EL EXPERTO

performed, avoiding putting them at risk or, failing that, preferably granting paid leave of absence subject to compensation at a later date.

- Pre-occupational medical examinations continue to be suspended for high-risk activities, and must only be performed on workers who have not had an occupational medical examination within the last year; periodic occupational medical examinations are also suspended.
- Occupational health and safety management system audits remain suspended.
- In the event that it is not possible to hold physical or virtual elections for the members of the Occupational Health and Safety Committee or the Supervisor, their term of office is extended.
- The labor facilities remain in effect for the worker who is the sole caregiver and support person of a direct family member with COVID-19 or who is in the risk group.
- The digital issuance, remittance and preservation of work documents, as well as the use of the holographic signature.
- The virtual performance of union activity acts, as well as the virtual submission of communications between unions and employers.
- Electronic notifications by the Administrative Labor Authority (AAT, acronym in Spanish) remains in effect.
- Employers may unilaterally modify, in a staggered manner, the work shifts and schedules of their workers as a preventive measure against the risk of COVID-19 spread.

Although these labor aspects continue to be in force due to the health emergency, employers should consider they may be deactivated within a short time and they should then take the necessary measures for their reactivation or suspension, as applicable. ☺



**En el cuarto trimestre del 2022 destacaron dos proyectos de ley presentados por miembros de las bancadas de Podemos Perú y Perú Libre. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.**

### Colegios privados deben informar con anticipación aumento de pensiones<sup>1</sup>

Mediante el Proyecto de Ley n.º 1187/2021-CR<sup>2</sup>, denominado “Ley que autoriza la oportuna información sobre pago de pensiones escolares, modificando el artículo 14.2 de la Ley 26549, Ley de los centros educativos privados”, el congresista José Luna, de la agrupación política Podemos Perú, busca que los centros educativos informen a los padres de familia sobre el incremento de las pensiones educativas, monto de matrícula y cuota de ingreso, en un plazo no menor de 90 días calendarios previos al inicio del año escolar.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) aprobó el pasado 15 de noviembre este dictamen, el cual recoge las precisiones enviadas por Indecopi, respecto a un plazo promedio como mínimo para brindar la información con anticipación acorde al pago de matrícula o pensiones.

Como se recuerda, la normativa actual señala que las instituciones tienen que informar sobre cambios en la mensualidad o cuota de ingreso para el siguiente año solo 30 días antes de que terminen las clases.

### Licencia en favor de hombres para prevención de cáncer<sup>3</sup>

El congresista de la bancada Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó el Proyecto de Ley n.º 3499/2022-CR<sup>4</sup>, denominado “Ley que fortalece la prevención de cáncer en los hombres y la atención especializada oncológica para el cuidado de salud de nuestros integrantes de la familia y de nuestra sociedad”, el cual pretende otorgar una licencia con goce de haber de un día al año en favor de los hombres para que se realicen los exámenes de detección precoz del cáncer de próstata y otros de dicho tipo.

El proyecto también plantea que las aseguradoras incorporen de manera obligatoria en sus planes de seguro nuevos procedimientos como el de radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia y prostatectomía radical, entre otros. |||

<sup>1</sup> El Estudio Muñiz presenta bimestralmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

<sup>2</sup> (15 de noviembre de 2022). Dan primer paso para que colegios privados informen con anticipación el incremento de pensiones. Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/empresas/colegios-privados-del-peru-deberan-informar-con-anticipacion-el-incremento-de-pensiones-rmmn-noticia/>

<sup>3</sup> Proyecto de ley 1187/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTE3MDk=/pdf/PL0118720220121>

<sup>4</sup> (14 de noviembre de 2022). Congreso prepara nuevo descanso para prevención de cáncer en favor de los hombres. Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/laboral-se-trabaja-nuevo-descanso-para-prevencion-de-cancer-en-favor-de-los-hombres-noticia/>

<sup>4</sup> Proyecto de ley 3499/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTcyODg=/pdf/PL0349920221108>



**On the fourth quarter of 2022, two bills submitted by members of Podemos Perú and Peru Libre caucuses drew attention. Below is a summary of both legislative initiatives.**

### **Private Schools should Inform in Advance Regarding Fee Increase<sup>1</sup>**

By submitting Bill No. 1187/2021-CR<sup>2</sup>, called “Act authorizing the timely information on school fee payments, amending article 14.2 of Act 26549, Act on private schools”, Congressman José Luna, of Podemos Perú party, aims for schools to inform parents on the increase of school, enrollment and admission fees in a period of no less than 90 calendar days prior to the start of the school year.

The Consumer Protection Commission and Public Services Regulatory Bodies (Codeco, acronym in Spanish), approved this opinion last November 15. It gathers Indecopi's clarifications regarding a minimum average period for schools to provide the information regarding the payment of enrollment or school fees in advance.

The current regulations set out - as recalled - that institutions must inform of those changes in the school or enrollment fees for the following year only 30 days before the year end.

### **Leave of absence to men for cancer prevention tests<sup>3</sup>**

Segundo Montalvo, congressman of Perú Libre caucus, submitted Bill No. 3499/2022-CR<sup>4</sup>, called “Act reinforcing cancer prevention in men and specialized cancer care to safeguard our family members' and our society's health”. This aims at granting a paid leave of absence of one day once a year for men, so they can take prostate exams for early cancer detection and other exams akin to that.

The bill also poses a mandate for insurance companies to incorporate new procedures such as radiotherapy, hormone therapy, chemotherapy and radical prostatectomy, among others, in their insurance plans.

Finally, it sets forth insurance companies cover physical rehabilitation treatments and monitoring to ensure the elimination of prostate cancer and other types of cancer. □

<sup>1</sup> Estudio Muñiz delivers its clients the legal product “From the Congress” on a bimonthly basis. This is a publication containing a selection of the bills currently in debate in the Congress of the Republic, which can affect the business environment. Columns will include two of several published projects which are still under commissions.

<sup>2</sup> (November 15, 2022). First step for private schools to inform in advance regarding fee increase Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/empresas/colegios-privados-del-peru-deberan-informar-con-anticipacion-el-incremento-de-pensiones-mmnn-noticia/>

<sup>3</sup> Bill 1187/2021-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUwNjI=/pdf/MTExMDk>

<sup>4</sup> (November 14, 2022). The Congress drafts a new leave of absence for men to have cancer prevention tests. Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/laboral/se-trabaja-nuevo-descanso-para-prevencion-de-cancer-en-favor-de-los-hombres-noticia/>

<sup>4</sup> Bill 3499/2022-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUwNjI=/pdf/PL0349920221108>

# Digitalización de documentos instrumentales con valor legal

Las organizaciones y el propio Estado han venido haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información, lo cual se ha visto acrecentado por la crisis sanitaria mundial. Por ello, los beneficios obtenidos han impactado favorablemente en los estados financieros y en el retorno de la inversión, ya que contar con un sistema de gestión documental eficiente reduce el tiempo de respuesta en la atención de un requerimiento interno o externo, así como en la calidad de la respuesta que se brinda, exonerándonos de la obligación de contar con archivos físicos o de la tercerización de dicho servicio.

Los documentos archivísticos en soporte papel deben ser claramente identificados. En concreto, debemos saber qué tipo de instrumentos son los que tenemos, ya sea por su antigüedad, por la unidad orgánica que lo produjo o su ubicación actual. No podremos iniciar un proyecto de digitalización si, previamente, no conocemos detalladamente nuestra fuente archivística, a través de un diagnóstico. Existen técnicas y procedimientos archivísticos que nos ayudan con esta tarea.

Conocer la naturaleza de los papeles que tenemos en nuestros archivos es de vital importancia. Efectivamente, la clasificación documental nos permitirá saber si dichos documentos tienen un valor económico, social, histórico o legal, y si la información contenida en ellos aún resulta necesaria para el negocio.

Si la organización ha tomado la decisión de trasladar todo su archivo documental físico a uno digital, esta debe realizar un proceso de digitalización. Sin duda alguna, el proceso puede efectuarse escaneando documentos en forma directa; sin embargo, dicha digitalización no tendría valor legal, ya que sería única y exclusivamente referencial, lo que nos crea la contingencia que dichos documentos digitales puedan ser repudiados en la exigencia de un derecho, en el cumplimiento de una obligación o en un juicio de valor.

No olvidemos el principio de equivalencia funcional, es decir, aquel mediante el cual el archivo digital reemplaza al papel, que es a través del uso de la fe pública que brinda el fedatario juramentado con especialización en informática, con el empleo de una firma digital y el uso de una línea de producción debidamente certificada por una empresa certificadora autorizada por el Estado.

Luego de digitalizado todo nuestro archivo, podremos eliminar los papeles que hayan excedido el tiempo de retención documental, ya que determinadas normas nos impiden eliminar determinados papeles por un período de tiempo. Por ejemplo, el artículo 28º de la Ley n.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un período de veinte años. Entonces, podremos observar que, según la naturaleza corporativa, civil, tributaria y laboral, existen períodos de retención documental donde no podemos eliminar dichos documentos originales, aunque ya los tengamos en formato digital; pero la reducción de todo nuestro archivo físico será, evidentemente, significante.

Digitalicemos nuestros documentos, pero hágámoslo con valor legal para evitar posibles contingencias, cuidando de verificar nuestros períodos de retención legal y volvamos más eficiente nuestra organización. 



**RICARDO CATTER**

Asociado, especialista en derecho laboral

*Member, Labor Law expert*

[rcatter@muniizlaw.com](mailto:rcatter@muniizlaw.com)

## ***Digitization of Instrumental Documents with Legal Value***

**T**here has been an intensive use of information technologies by organizations and the State, which has increased due to the global health crisis. For this, the obtained benefits have had a positive impact on the financial statements and the investment return, as having an efficient documental management system reduces the response time in addressing an internal or external requirement, as well as the quality of the response provided. Thus, they are exempted from the obligation of keeping physical files or outsourcing this service.

Archives in paper format must be clearly identified. Specifically, we must know the type of instruments we have, either because of their age, organizational unit of origin or their current location. We cannot start a digitization project without the prior, fully detailed knowledge of the archive source through diagnosis. There are archival techniques and procedures useful for this task.

It is of the essence to know the nature of the documents in our files. Indeed, document classification will let us know whether these documents have an economic, social, historical or legal value, and whether the information they contain is still necessary for the business.

If the organization has decided to transfer its entire physical document archive to a digital format, it must carry out a digitization process. Definitely, the process can be done by directly scanning documents; however, such digitization would lack legal value, since it would be solely for reference. This creates contingency: said digital documents may be disavowed when enforcing a right, fulfilling an obligation or in a value judgment.

Let us keep in mind the principle of functional equivalence, by which the digital file replaces the physical format. This is done through the use of the public faith provided by the notary public specializing in IT, using a digital signature and a production line duly certified by a certification company authorized by the State.

After digitizing the entire file, we can dispose of the papers that have exceeded the document retention period, since certain regulations prevent us from eliminating certain papers for a period of time. For example, Article 28 of Act No. 29783, Occupational Health and Safety Act, sets out that the records related to occupational diseases must be kept for a period of twenty years. Therefore, we can see that, depending on a corporate, civil, tax, or labor nature, there are document retention periods where the original documents must be kept, even if they are in digital format already. But, despite this, the reduction of the entire physical archive will be clearly significant.

Let us digitize documents, but with legal value to avoid any contingency, verifying the legal retention periods, and let us make our organization more efficient. |||



# ¿Es legítima la resolución unilateral de contrato sin expresión de causa?

**E**n los últimos tiempos las relaciones contractuales entre las partes se han visto amenazadas por la sombra del incumplimiento y los perjuicios propios que deja una pandemia mundial como la del COVID-19; hecho concreto y devastador que ha col llevado a las partes de dicha relación contractual tomar mano de cualquier medio legal de extinción de obligaciones o terminaciones anticipadas de los contratos.

Es así que, dentro de las varias posibilidades que nos brinda la ley, nos encontramos con una no muy agraciada fórmula de resolución que se encuentra casi entre sombras, satanizada por algunos y abanderada por otros, me refiero a la resolución unilateral sin expresión de causa; polémica circunstancia o estrategia legal que nos lleva a analizar el espíritu interno de la norma que ampara este pacto, muchas veces poco comprendido. Ello nos obliga a darle un vistazo a temas tan conocidos, pasando desde la

voluntad privada de las partes hasta los principios de la buena fe y el abuso de derecho.

En este contexto, y bajo la luz de una simple lógica, sabemos que los contratos se han hecho para cumplirse y no para que una de las partes, unilateralmente y sin expresión de causa, pueda desligarse libremente de las obligaciones que voluntariamente asumió, sin que ello implique asumir una suerte de responsabilidad en las consecuencias dañosas que dicha decisión genere a la otra parte de la relación contractual; seguridad jurídica que además es la base de las relaciones contractuales de toda sociedad respetuosa de sus normas.

Sin embargo, podemos decir que sí es posible aplicar la resolución unilateral de un contrato sin expresión de causa, siempre que dicha cláusula haya sido pactada en el contrato y no exista una prohibición específica en la ley; prueba de ello es lo contemplado en el art. 1356º del Código Civil que faculta a las partes a

optar por una resolución unilateral sin expresión de causa en los contratos indeterminados. Otro ejemplo lo tenemos en el art. 50° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en donde la ley permite que en los contratos civiles y comerciales, siempre que no sean de consumo, se pueda pactar libremente la facultad de resolver unilateralmente y sin expresión de causa, todo ello en el ejercicio regular de un derecho conferido por la propia ley.

Bajo este respaldo legal no podría decirse que dicho pacto de resolución sin expresión de causa sea ilícito, vulnere el principio *pacta sunt servanda* o se sostenga en un argumento del ejercicio abusivo del derecho, pues al ser un pacto consensuado entre las partes de poner fin al contrato en cualquier momento sin expresión de causa, el mismo resulta legítimo entre las partes.

A lo anterior expuesto, y como nada es absoluto, ante la pregunta, ¿por qué obligar a las partes de un contrato a permanecer ejecutándolo si esa ya no es su voluntad, al haber previsto o pactado una cláusula de salida unilateral? podríamos responder que lo reprochable no es eso y que el problema real radica en la situación de desventaja que desequilibra la relación contractual y que indefectiblemente podría culminar en una secuela de daños que deben ser tutelados, siendo legítimo también que la parte que hace uso de esa prerrogativa la ejerza haciéndose cargo de los perjuicios que su decisión pueda causarle a la otra.

Para ello, es necesario poner sobre la mesa el rol determinante de la buena fe. El art. 1362° del Código Civil la define como un criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones. En el ámbito de la relación contractual la buena fe obliga a cada una de las partes a comportarse de manera tal de no perjudicar al otro, y por el contrario de salvaguardar el razonable interés de la contraparte, cuando ello no importe ningún apreciable e injusto sacrificio a cargo suyo.

En conclusión, si bien es cierto que la resolución unilateral sin expresión de causa puede ser una salida legítima, es también cierto que ello deberá de ser ponderado y no responder a meros caprichos de las partes, tal y como algunas jurisprudencias la han establecido, indicando que dicha resolución deberá hallarse siempre fundada en un motivo racional y justo que la justifique, pues establecer que no sea necesario expresar la causa es una cuestión distinta a que ese mismo acto carezca de ella o de que esta sea contraria a derecho. Una

decisión unilateral no podrá nunca fundarse en una mera arbitrariedad o capricho de una de las partes, quienes nunca deberán alejarse de un actuar leal, diligente y de buena fe. |||

---

**En los últimos tiempos las relaciones contractuales entre las partes se han visto amenazadas por la sombra del incumplimiento y los perjuicios propios que deja una pandemia mundial como la del COVID-19; hecho concreto y devastador que ha collevado a las partes de dicha relación contractual tomar mano de cualquier medio legal de extinción de obligaciones o terminaciones anticipadas de los contratos.**

---



CARLA SORIANO GARCIA  
Socia, sede Ica  
*Partner, Ica headquarters*  
csoriano@munizlaw.com

## ***Is unilateral termination of a contract without cause a legitimate tool?***

**C**ontractual relationships between the parties have been lately threatened by the shadow of breach and damages left by a global pandemic such as COVID-19. This concrete and devastating fact has led the parties of said contractual relationship to use any legal means for extinction of obligations or early termination of a contract.

Thus, among the various possibilities provided by the law, we find one not very attractive termination formula, almost hidden in the shadows, demonized by some and praised by others: the unilateral termination without cause. This is a controversial circumstance or legal strategy that leads to an analysis of the regulations governing this often misunderstood covenant. This makes us take a look on well-known subjects, going from the private will of the parties to the good faith principles and abuse of rights.

In this context, by applying simple logic reasoning, we know that contracts have been made to be honored, not for one of the parties to freely and unilaterally terminate without cause the obligations it voluntarily undertook and without facing the responsibility of the harmful consequences said decision inflicts to the other party of the contractual relationship. This legal certainty is, also, the basis of contractual relationships in a society that respects its regulations.

However, it is possible to state that a unilateral termination of a contract without cause is applicable had said clause been agreed in the contract and there is no specific prohibition in the law. E.g., art. 1356 of the Civil Code authorizes the parties to choose a unilateral termination without cause in indefinite contracts. Art. 50 of the Consumer Protection and Defense Code is another example of this. The law allows to freely agree a unilateral termination of civil and commercial contracts without cause, as long as they are not offtake contracts; all of this within the regular exercise of a right granted by the law itself.

As per this legal support, such covenant for termination of a contract without cause could not be deemed unlawful, or in violation of the *pacta sunt servanda* principle or based on an argument of abusive exercise of a right. Since it is a consensual agreement between the parties to end the contract at any time without cause, it becomes legitimate.

Considering the aforementioned and since nothing is absolute, why would the parties of a contract be forced to continue enforcing it if that is no longer their will since they had foreseen or agreed to a unilateral termination clause? The answer could be that this fact is not reprehensible, but the real problem lies in the disadvantage unbalancing the contractual relationship that could inevitably end in a series of damages that must be prevented. Also, it is legitimate that the party exercising this prerogative undertakes the damages that their decision may cause to the other party.

For this, it is necessary to pose the determining role of good faith. Art. 1362 of the Civil Code defines this as a standard of conduct according to which obligations must be met. In the contractual relationship scope, good faith bounds each party to behave in such a way as not to damage the other party and, conversely, to protect the reasonable interest of the other party, when this does not entail any significant and unfair sacrifice at their expense.

Finally, although unilateral termination without cause may be a legitimate solution, it is also true that it must be weighed and not be a mere whim of the parties, as set out in some case law. Said case law indicates the termination must always be based on a rational and fair reason that justifies it, since establishing that it is not necessary to state the cause is different than stating said act lacks a cause or that the cause opposes the law. A unilateral decision may never be based on an arbitrary action or whim of any of the parties. The parties should always show loyalty, diligence and good faith. |||

## Webinars

Llevamos a cabo distintos webinars con nuestros clientes. Nos hemos ocupado de los sujetos sin capacidad operativa en minería; de los riesgos de importar mercancías restringidas al Perú; de la regulación y supervisión de Indecopi a los transgénicos; entre otros.

*We delivered various webinars with our clients. We have addressed the subject of individuals without operational capacities in mining; the risks of importing restricted goods to Peru; Indecopi's regulation and supervision of GMOs; among others.*



## Leaders League 2023

Nuestras especialidades de Corporate / M&A, Corporate Tax, Labor & Employment, Venture Capital, Restructuring & Insolvency, Wealth Management, Banking & Finance, Real Estate y Tax: Litigation fueron destacadas por la prestigiosa guía legal Leaders League 2023.

*Our areas of expertise for Corporate / M&A, Corporate Tax, Labor & Employment, Venture Capital, Restructuring & Insolvency, Wealth Management, Banking & Finance, Real Estate and Tax Litigation were highlighted by prestigious legal ranking Leaders League 2023.*



**The Legal 500**

- ✓ Banking and Finance
- ✓ Bankruptcy and Restructuring
- ✓ Capital Markets
- ✓ Competition and Antitrust
- ✓ Compliance
- ✓ Corporate and M&A
- ✓ Dispute Resolution
- ✓ Energy and Natural Resources: Electricity
- ✓ Energy and Natural Resources: Hydrocarbons
- ✓ Energy and Natural Resources: Mining
- ✓ International Trade (ITC)
- ✓ Labour & Employment
- ✓ Life Sciences And Healthcare
- ✓ Public Law and Regulation
- ✓ Real Estate
- ✓ Tax
- ✓ TMT (Technology, Media and Telecoms)

## The Legal 500

The Legal 500, uno de los directorios legales más importantes dedicado a monitorear la actividad de abogados y despachos, reconoció a 18 de nuestras áreas de práctica en su edición 2023.

*The Legal 500, one of the most important law firm rankings engaged in monitoring attorneys and law firms' activities, acknowledged 18 of our practice areas in its 2023 edition.*

## Deal of the Quarter (3Q)

TTR reconoció como Deal of the Quarter (3Q) la operación en la que actuamos como asesores de San Miguel Fruits en la venta a favor de la empresa española Citri&Codel del 100 % de San Miguel Fruits Perú por USD 77 millones. En esta transacción participaron Mauricio Olaya, socio principal y director del área de Derecho Corporativo y M&A; Juan Carlos Vélez, socio senior de dicha área; Luis García, socio senior del área de Derecho Tributario y Rolando Wilson, asociado senior.

*The operation in which we acted as legal advisors for San Miguel Fruits on the sale in favor of Spanish Company Citri&Codel of 100% of San Miguel Fruits Peru for the amount of USD 77 million was acknowledged by TTR as Deal of the Quarter (3Q). Our attorneys in that transaction were: Mauricio Olaya, main partner and director of the Corporate and M&A area; Juan Carlos Vélez, senior partner of said area; Luis García, senior partner of the Tax Law area; and Rolando Wilson, senior member.*

**TRANSACCIÓN**

Citri&Co completa la adquisición del 100% de San Miguel Fruits Perú

El importe de la transacción ha sido USD 77 millones.

**TTR**  
DEAL OF THE QUARTER  
PERU  
3Q 2022

**TRANSACCIÓN**

Nuestro estudio asesoró al BBVA en un financiamiento a Pesquera Ninfas por USD 12 millones

Rocio Izquierdo Socia Alesandra Azcarate Asociada senior

## Transacción BBVA Perú

Asesoramos al Banco BBVA Perú en el otorgamiento de un financiamiento por USD 12 millones a favor Pesquera Ninfas del Mar S.A.C., con sede en Bilbao, España. Nuestra socia Rocío Izquierdo Flores y las asociadas senior Alesandra Azcárate y Judith Puerta lideraron esta transacción de una de las instituciones financieras globales más importantes del mundo.

*We were legal advisors for BBVA Peru bank in a funding for USD 12 million in favor of Pesquera Ninfas del Mar S.A.C., based in Bilbao, Spain. Our partner Rocío Izquierdo Flores and senior members Alesandra Azcárate and Judith Puerta lead this transaction of one of the most important global financial institutions in the world.*

## IFLR1000

IFLR1000 reconoció al Estudio Muñiz como una firma líder en nuestras seis áreas de especialización: Banking, Capital markets: Debt, M&A, Project development, Project development: Mining y Project finance.

*IFLR1000 acknowledged Estudio Muñiz as a leading law firm in our six areas of expertise: Banking, Capital markets: Debt, M&A, Project development, Project development: Mining and Project finance.*

**IFLR1000**

- ✓ Banking
- ✓ Capital markets: Debt
- ✓ M&A
- ✓ Project development
- ✓ Project development: Mining
- ✓ Project finance

**IFLR1000 ha reconocido el liderazgo de nuestra firma en el mercado legal peruano**

Jorge Mella Socio principal  
Mauricio Olaya Socio senior  
Jorge Olaya Socio senior  
Juan Carlos Vélez Socio senior  
Sergio Oquendo Socio  
Rolando Salaverría Socio senior  
Ricardo de la Piedra Socio senior  
Guillermo Flores Socio  
Alonso Vélez Socio

Las Begonias 475, Piso 6

Lima 27 - Perú

T (51-1) 611-7000



[www.munizlaw.com](http://www.munizlaw.com)



ESTUDIO  
**MUÑIZ**

MUÑIZ  
OLAYA  
MELEÑEZ  
CASTRO  
ONO  
& HERRERA  
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca